

INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA EN CHILE Y MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES POST DICTADURA: TENSIONES Y DESAFÍOS DE DEMOCRATIZACIÓN

Investigación en curso.

GT 13

Paula Zabala Lladós

Resumen

A lo largo de la década 2000-2010, en Chile se hizo evidente la tensión progresiva entre el ámbito de la política instituida y los nuevos actores sociales que comenzaron a disputar un lugar en los procesos de toma de decisiones. Particularmente durante esta década, los estudiantes de secundaria pasaron a formar parte de la arena política del país, enfrentando -con mayor o menor acierto- a la institucionalidad vigente.

A través de las movilizaciones de los estudiantes secundarios, esta propuesta de comunicación intenta hacer visible la confrontación entre procesos de ampliación de la esfera pública y el sistema democrático vigente, enraizado en un proceso paradójico de democratización. A partir de un cuestionamiento a la concepción dominante en Chile respecto a los movimientos sociales como contrarios a la estabilidad democrática, se indaga en cómo el sistema representativo ha sido tensionado con formas fronterizas de comprender y significar la política.

Palabras claves: Movimientos estudiantiles, ciudadanía, democracia participativa.

INTRODUCCIÓN

En Chile, más que en otros países latinoamericanos con mayores experiencias en el ejercicio de la democracia directa, la tendencia ha sido excluir de los procesos políticos a aquellas prácticas no provenientes de causas institucionales. Prácticas a las que desacertadamente se les ha adjudicado, principalmente desde los grupos dominantes, las consecuencias de desestabilización democrática e ingobernabilidad.

Muchas de las experiencias de participación popular en Chile, no solo se han visto tensionadas con el fuerte principio de autoridad que prima en el ideario político nacional, sino que han quedado subordinadas a éste. Un ideario que recientemente ha derivado en la criminalización de los movimientos sociales, que lejos de ser considerados como una oportunidad de profundización de la democracia, han sido señalados como sus enemigos directos.

Desde hace tres décadas que hemos venido siendo testigos de la exclusión de los movimientos sociales de los principales procesos de democratización y de reformas acontecidos en el país. La transición a la democracia, si bien fue en alguna medida motivada por las movilizaciones populares y estudiantiles de la época, se llevó a cabo mediante negociaciones entre el gobierno militar, el empresariado y los partidos políticos. Luego, durante los gobiernos democráticos, lo que ha primado ha sido la neutralización del accionar colectivo en el espacio público, ya sea mediante su criminalización y uso de la fuerza policial, o bien, mediante la creación de instancias institucionales de participación

ciudadana y comisiones técnicas que han terminado definiendo los lineamientos de reforma, como fue el caso de la Ley General de Educación promulgada en 2009.

El fuerte malestar social que se ha hecho notar a través de las manifestaciones públicas lideradas por los estudiantes, que tuvo su más amplia adhesión el año 2011, se ha chocado con un discurso oficial que sitúa a Chile como un país próspero, seguro y estable, que brinda condiciones de vida satisfactorias. La imagen de Chile como país modelo de éxito neoliberal se opone a la de un país de enormes desigualdades económicas que no ha logrado generar las condiciones sociales y políticas para una democracia que vaya más allá de lo meramente “instrumental” (Hinkelammert, 1988).

Situando el presente análisis desde la transición a la democracia a la fecha, por medio de esta presentación quisiera esbozar cómo en la actualidad se ha desplegado la mentada dicotomía entre lo que –basándome en las definiciones del Análisis Institucional- denominaremos *lo instituido*, es decir, aquello que está establecido y que tiene pretensión de universalidad, de perennidad y de verdad (conjunto de valores y normas dominantes, de status y roles, de leyes que fundamentan el orden social) y *lo instituyente*, entendido como aquello que “define la fuerza de protesta contra lo instituido y que se manifiesta haciendo caer la máscara de universalidad, perennidad y verdad con que lo instituido se presenta” (Petit, 1984:180-181).

Para ello, me focalizaré en las movilizaciones estudiantiles de los secundarios durante la década 2000-2010, enfrentada a una institucionalidad cuya estructura corresponde al diseño ideado en dictadura. Poniendo en entredicho la concepción dominante en Chile respecto a los movimientos sociales como contrarios a la estabilidad democrática, se busca hacer visible la confrontación entre procesos de ampliación de la esfera pública -provenientes de formas fronterizas de comprender y significar la política- (lo instituyente) y el sistema representativo vigente (lo instituido), cuyas bases se fundan en un proceso paradójico de democratización. Con ello, se pretende entregar algunos elementos que permitan comprender la contribución que las luchas políticas públicas tienen en la legitimación de la democracia y en la ampliación de su dimensión representativa.

1. Transición a la democracia y gobernabilidad: el ocaso de los movimientos sociales.

La transición hacia la democracia en Chile se desarrolló mediante un proceso pactado con la oposición, en el que primó la estabilidad institucional y la intervención de los partidos políticos de derecha y centro izquierda, con exclusión del ala radical de la izquierda ligada a los movimientos sociales, lo que garantizó la continuidad de gran parte de las disposiciones constitucionales instauradas por el régimen autoritario.

La importancia asignada a la *gobernabilidad democrática* post dictadura, llevó a la exclusión de la agenda pública el tema de la participación social y política (Arrau y Avendaño, 2003; Moreno, 2007). Los primeros gobiernos de la Concertación estuvieron centrados en la estabilidad del proceso de transición y en la generación de condiciones político - institucionales y económicas para garantizar la gobernabilidad y evitar una posible regresión autoritaria, lo cual mantuvo al margen la participación pública de la ciudadanía. La consecuencia fue un progresivo declive de la participación ciudadana durante la década de los 90'. La considerable disminución de la participación electoral y los resultados de los estudios de opinión, contribuyeron a instalar la idea de un creciente cuestionamiento a las instituciones democráticas.

La necesidad por revitalizar la democracia y devolverle legitimidad a la participación política institucional, hizo que surgiera un discurso político centrado en la vinculación del Estado con la sociedad civil y en el papel de éste como garante de la integración de la ciudadanía a los procesos de democratización del país. De ahí, sucesivas iniciativas gubernamentales fueron presentando

progresivamente mecanismos de apertura hacia la participación ciudadana en la gestión de lo público. A partir de la segunda mitad de los noventa, el énfasis en política pública estuvo puesto en la descentralización, potenciando la participación de las comunidades en la ejecución de programas a nivel local. Durante los dos últimos gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (2000-2010), se formularon -desde la Presidencia- algunos marcos normativos para la administración pública en materia de ciudadanía y participación.

Muchas de estas iniciativas resultaron relativamente exitosas a nivel regional y local, traduciéndose en la realización de diversos proyectos que incorporaron a las comunidades en su desarrollo. No obstante, aquellas instancias que requerían un mayor nivel de incidencia en la toma de decisiones política, en la práctica no tuvieron los resultados esperados¹. La ciudadanía y la participación pública, aún cuando haya formado parte de la agenda democrática, quedó excluida de las decisiones vinculadas a los temas estructurales del país.

Este escenario comenzó a cambiar iniciada la siguiente década. Los estudiantes secundarios aparecieron el año 2001 ocupando la escena social y política del país con formas de organización que prontamente se vieron tensionadas con la institucionalidad política. Su despliegue a lo largo de la década, aún cuando cambiaran escenarios y protagonistas, significó la (re)aparición del movimiento social como actor político relevante en Chile.

2. Los estudiantes secundarios se enfrentan al legado de la dictadura.

Durante la dictadura, los estudiantes secundarios sin duda fueron un actor político relevante que se manifestó en contra de las políticas de municipalización de la educación pública y conformó una orgánica que permitió coordinar sus acciones de oposición al régimen autoritario.

Si bien su reaparición en democracia nos plantea nuevos desafíos para abordarlo como fenómeno social, cultural y/o político, en una sociedad que ha presentado importantes cambios durante un proceso de modernización creciente, no nos parece que se trate de un fenómeno completamente nuevo y desligado del período anterior. Nuestro contexto y estructura política actual, a partir de la cual es posible explicar la aparición y desenvolvimiento de las movilizaciones de los estudiantes secundarios, se encuentra fuertemente enraizada a los cimientos de la dictadura. No olvidemos que la sociedad neoliberal comienza a articularse en Chile a principios de los ochenta, y que además las herencias institucionales del periodo autoritario aún permanecen vigentes. También, podemos constatar que las formas de protesta poseen características similares a las de los años 80⁷. Como ha señalado Gabriel Salazar “Todas estas protestas ciudadanas recuerdan a las protestas contra la dictadura del general Pinochet. Son las mismas rutinas que ya se aprendieron de memoria” (CNN Chile, 2001).

Lo anterior no quiere decir que las movilizaciones de los estudiantes secundarios en democracia sean entendidas como un mero continuismo del período anterior, pues desconoceríamos con ello su carácter innovador, que además se despliega en un marco político y económico que presenta mayores garantías y menor precariedad, respectivamente.

La participación pública de este colectivo no se ha presentado ni ininterrumpidamente, ni evolutivamente, ni menos aún sin contradicciones ni rupturas. La desarticulación política que sufrieron con posterioridad a la dictadura, los conminó a aparecer secundando a los universitarios en las iniciativas de movilización social, durante la década de los noventa. Esta desarticulación se debió en parte a las políticas gubernamentales de descomposición de los principales movimientos populares que

¹ Según Carolina Aguilera (2007), aquellos mecanismos de carácter consultivo – deliberativo, tales como los Consejos Asesores de Gobierno durante la administración Bachelet, en la práctica operaron más bien como comité de expertos, con acotada amplitud ideológica y una marcada verticalidad.

habían emergido en oposición a la dictadura durante los ochenta, en pos de la gobernabilidad democrática, que en este caso se expresó en la Ley de Centro de Alumnos de 1990, en la creación del Parlamento Juvenil² en 1997, y en la presencia mayoritaria de militantes de los partidos de la coalición de gobierno al interior de la Federación de Estudiantes de Santiago (FESES).

Es recién a partir del año 2000, tras la conformación del Frente contra las Alzas (FECA), de la Coordinadora Revolucionaria Estudiantil Autónoma (CREA), y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), de inspiración anarcosindicalista, que los estudiantes secundarios comenzaron a gestar estrategias de influencia política en las decisiones públicas, que prontamente alterarían el escenario político post dictadura. Estas organizaciones que emergieron a partir de un quiebre con las Juventudes Comunistas y en abierta oposición al oficialista Parlamento Juvenil, tenían como objetivo central generar mecanismos de democracia directa. Su aparición no respondió a un proceso espontáneo y carente de ideales políticos, como en reiteradas ocasiones fue connotado en los medios³, sino que se forjó en torno a un proceso incentivado por agrupaciones con claras intenciones de transformación en la forma de hacer política. Las movilizaciones de la ACES, súbitas e inesperadas para la clase política, contaron con espacios previos de articulación y organización, anclados a las dinámicas de intercambio cultural al interior de los establecimientos educacionales, que se fueron articulando en torno a colectivos de izquierda. Como uno de sus dirigentes explica:

“Estos colectivos tenían la reivindicación del voto nulo y de poder usar el pelo largo, que a mí me parecían mucho más interesantes para poder producir acción colectiva, para producir movimiento (...) De todo eso, nosotros el 2000, teníamos la idea de hacer un colectivo para construir un movimiento más grande (...). Fue un proceso políticamente conducido, pero conducido por cabros que estaban viviéndola en la concreta en los dos espacios, no era la conducción clásica dura.”⁴

La idea inicial de la ACES fue articular una movilización en torno a un tema concreto, que luego pudiese canalizar demandas más profundas orientadas a reformar la educación, pero en esos momentos no existían las condiciones políticas para el planteamiento de dichas reformas. Paralelamente, el proceso permitió diversificar la arena política al interior del estudiantado, que se fue diferenciando de la lógica de los partidos:

“Lo que se empieza a buscar tiene que ver con poder desarmar un poco la política que estaba desarrollando las Juventudes Comunistas y buscar demandas concretas en base a las cuales organizar a los estudiantes (...) Dentro de ese análisis que se hace el año 2000, se ve que las problemáticas -relacionadas con el transporte, por una parte, y por otra parte con las problemáticas internas que se viven en cada liceo- serían los espacios en los cuales nosotros podíamos entrar a influir. Y por lo tanto, cuando se crea la ACES en octubre del año 2000, dentro de su declaración de principios -que era bien amplia, que era por la Educación

² El Parlamento Juvenil fue una iniciativa surgida en la Cámara de Diputados como una forma de vincular los intereses juveniles con el mundo político.

³ Un artículo de prensa muy gráfico de esto, es el aparecido en el Suplemento El Semanal del diario La Nación el domingo 8 de Abril de 2001, titulado “Una marcha de nuevo siglo”, vinculando a las movilizaciones a asociaciones de consumidores.

⁴ Dirigente estudiantil año 2001. Entrevista realizada el 11 de diciembre de 2011 en Santiago de Chile. Entrevistador: Paula Zabala LLadós.

gratuita y de calidad para todos- define la lucha por el tema del transporte como un elemento central.”⁵.

El malestar vinculado a reivindicaciones de carácter contingente, como fue la demanda por la regulación de la tarifa del transporte escolar y la emisión del pase escolar, que articuló las protestas del año 2001, sentó importantes bases organizativas y un precedente en la consecución de objetivos políticos. El hecho de haber conseguido que el pase escolar dejara de ser administrado por empresas privadas del transporte como había sido dispuesto a fines de la dictadura, y volviera a manos del Ministerio de Educación, significó la constatación de la efectividad de las acciones y estrategias políticas que se habían llevado a cabo, aún cuando este logro hubiese sido mínimo comparado con las irregularidades que todo el sistema educativo presentaba.

El impacto de las movilizaciones no sólo tuvo efectos a nivel de la política pública, sino que abrió un proceso de identificación de los estudiantes secundarios como un actor social capaz de disputar poder y de formar parte de los procesos políticos de toma de decisiones. Quizás sea esto mismo lo que explique la asociación de su accionar con imaginarios vinculados a la amenaza del orden democrático. El propio término *mochilazo*, adjudicado a las movilizaciones de los estudiantes, puede ser leído como una connotación alarmista, de violencia o subversión que permitiría justificar la intervención de la fuerza pública. A nivel lingüístico, esta palabra -que alude una acción- posee una clara connotación de magnitud, aparición súbita e impacto. Por otro lado, hace referencia a “golpe” o “movimiento brusco”. Según Gómez (1999), con la utilización del sufijo *-azo*, la idea de “golpe físico” se ha extendido también a los “golpes de Estado”. En Chile, conocidos son los sucesos políticos vinculados al militarismo golpista, tales como el *tanquetazo* y el *boinazo*⁶. Siguiendo con Gómez (1999:párr.5) “se trata de vocablos creados para designar actitudes del Gobierno o de algún personaje famoso que tienen, según el hablante o el escritor, cierta trascendencia o relevancia, normalmente negativa, para una comunidad”.

La prensa oficial de la época, destacaba los incidentes ocurridos durante las manifestaciones y consignaba a los estudiantes como motor de los desórdenes en el orden público:

“...la columna de estudiantes rompió abruptamente el cerrojo policial y se trasladó raudo hasta Plaza Italia. Allí, el tránsito se vio interrumpido por más de 15 minutos, debiendo los automovilistas presenciar *pacientemente* el paso de cerca de cinco mil escolares que, *eufóricos*, marchaban dispuestos a “tomarse” el Parque Forestal. (...) Una lluvia de piedras y unas cuantas bombas de ruido *provocaron* la ofuscación de la policía uniformada, ordenando rápidamente la intervención de carros lanza agua y bombas lacrimógenas.”⁷

Por el contrario, una vez finalizada la primera etapa del conflicto, en la que “los jóvenes de 16 años tuvieron al país en jaque” (la Nación, 7 de Abril de 2001:48), se reconoció la importancia de las movilizaciones por haber posibilitado un cambio en la administración del pase escolar:

⁵ Vocero ACES año 2001. Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2011 en Santiago de Chile. Entrevistador: Paula Zabala LLadós.

⁶ El primer intento de derrocamiento militar al gobierno de Salvador Allende en 1973 fue conocido como el *tanquetazo*, y se designó como *boinazo* a la aparición pública de comandos armados del ejército en 1993, a modo de presión por la investigación que implicaba a la familia Pinochet en un caso de corrupción.

⁷ Diario La Nación, 10 de Abril de 2001, p.9. Las cursivas son mías.

"...la responsabilidad y altruismo de estos jóvenes, que han sido capaces de luchar por un objetivo que encontraron valioso, y una reivindicación justa, de la que nosotros nos hemos hecho parte. Los estudiantes han dado un claro ejemplo al país de cómo se tiene que luchar por las ideas o por las situaciones, cuando ellas se quieren cambiar".⁸

La llamada *Revolución de los pingüinos* del año 2006, de alcance nacional, vino a confirmar con fuerza lo que el 2001 ya se auguraba. Los jóvenes habían llegado para exigir cambios sustantivos. Sus reivindicaciones ya no sólo estaban vinculadas a problemas de financiamiento y gestión, sino que paulatinamente comenzaron a entrecruzarlas con temáticas de fondo. De este modo, las demandas de carácter gremial y de exclusiva reivindicación económica, fueron transformadas en exigencias de carácter eminentemente político.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)⁹ fue el principal foco de atención, análisis y crítica, exigiendo finalmente su derogación. Si bien estas movilizaciones no lograron el objetivo de derogar los puntos nodales de la ley, dejando sensaciones de derrota en amplios sectores del movimiento, el proceso de movilizaciones merece especial atención, pues no solo dejó huellas en la memoria social del país, sino que puso en jaque a la institucionalidad política.

El posicionamiento público de la temática, que se logró gracias a las nuevas formas de protesta, organización y estrategia comunicacional de los estudiantes, permitió que el mundo político institucional no permaneciera impávido ante las demandas de los jóvenes, aún cuando se tratara de menores de edad. El gobierno de Michelle Bachelet, que en un comienzo desestimó la fuerza de las movilizaciones obviando las demandas estudiantiles de la agenda de gobierno y luego criminalizando las protestas, terminó por asumir que no se podía hacer caso omiso a lo que ocurría. La conformación de un Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la Educación, la destitución del Ministro de Educación Martín Zilic, y el llamamiento público al cese del actuar violento por parte de carabineros, fueron hitos que -aún cuando no se tradujeran en grandes logros para las reformas educacionales exigidas- implicaron un esfuerzo estratégico por parte el gobierno y significaron cambios en las decisiones políticas iniciales.

El amplio apoyo social que concitó el estudiantado, principalmente mediante la decisión de abandonar las calles para evitar los enfrentamientos con la fuerza pública y ocupar los liceos como exclusiva forma de protesta, fue también un factor clave para provocar un cambio en el escenario sociopolítico y cultural del país. Los jóvenes ya no podían ser tildados tan fácilmente como delincuentes y las movilizaciones sociales dejaban de estar exclusivamente asociadas a desmanes en el espacio público. La consigna "estamos dando clases", difundida por la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, pretendía precisamente otorgar peso político a las acciones de los jóvenes. Durante las *tomas* de los liceos y el *paro* de sus actividades académicas, los estudiantes elaboraron estrategias comunicacionales, generaron documentos de análisis y de crítica al sistema educacional y levantaron propuestas para su transformación. Se comenzó a abrir, de este modo, la posibilidad de cuestionar abiertamente el modelo institucional heredado de la dictadura, y empezar a reconocer quiénes eran sus principales defensores.

⁸ Diputado Jaime Jiménez, Diario La Nación, 24 de Abril de 2001, p.8.

⁹ Como se sabe la LOCE, aprobada por la Junta Militar y promulgada justo antes de entregar el poder al gobierno democrático, brinda especial relevancia a la libertad de enseñanza (artículo 3, ley N° 18.962). Según el diagnóstico realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), la ley 18.862 "consagra un modelo de gestión y financiamiento de la educación que vulnera gravemente el derecho a la Educación de calidad para todos los niños/as y jóvenes chilenos" (OPECH, 2006), generándose una crisis de calidad, inequidad y segmentación social en las escuelas.

Los estudiantes secundarios, de este modo, se fueron constituyendo en un actor social que ha asumido la labor sociopolítica de cuestionar las bases institucionales del sistema político y económico del país. Con ello, ha logrado canalizar sus reivindicaciones económicas de corto y mediano plazo hacia demandas por cambios estructurales al sistema educacional, que han desencadenado en un abierto cuestionamiento a la lógica económica que articula la Constitución de 1980:

“nos dimos cuenta que esto es un problema que va más allá de la educación, es un problema de un modelo social que hoy en día está fallando y que hoy en día requiere cambios profundos. Que requiere una intervención del Estado, no como un Estado subsidiario, sino como un Estado garante.”¹⁰

Lo anterior abre la interrogante de si es posible pensar a un movimiento generacional, con características culturales propias, como un proceso político de largo alcance que pudiese llegar a desencadenar procesos de transformación social, en tanto ha dirigido sus cuestionamientos no solo al sistema político, sino al orden económico neoliberal.

Los temas abordados y posicionados públicamente por los estudiantes, a partir de un compromiso ideológico, han permitido revitalizar una lucha que se encontraba fuertemente anquilosada en la memoria de nuestro país. No olvidemos que uno de los motivos aludidos para explicar la crisis que habría conducido al boicot de la vía chilena al socialismo, fue la amplia politización de la sociedad, vista como un proceso amenazante y distorsionador de la institucionalidad democrática. De ahí los posteriores intentos por silenciar el actuar político colectivo en el espacio público, unido a la consolidación de un modelo de representación que ha favorecido los pactos mayoritarios, evitando con ello la inclusión de las minorías en la arena política.¹¹

3. La aparición de nuevas formas de significar la política: ¿se amplían las posibilidades de la democracia?

La horizontalidad en las formas de organización y representación observadas durante las manifestaciones estudiantiles, si bien ha hecho eco de la indiferencia hacia la participación electoral en los jóvenes, no ha significado un alejamiento de la política por parte de este sector. Las nuevas formas de organización propuestas por los jóvenes (asambleas, vocerías, manifestaciones culturales, intervenciones urbanas, acciones performativas, etc.) se han constituido en una abierta ruptura con el modelo político tradicional, caracterizado por una organización vertical de la política (Torres, 2010), que no tardó en descolocar a los actores institucionales.

Ya desde el 2001, las autoridades políticas evidenciaban su malestar con las formas de representación de los estudiantes. La prensa hacía hincapié en la insistencia de la Ministra de Educación, Mariana Aylwin, porque “los jóvenes nombren un solo interlocutor para negociar” (La Nación, 8 de Abril de 2001:7), y parafraseaba a Alejandro Traverso, Seremi Metropolitano de Educación, señalando que “resulta difícil negociar con estudiantes que muchas veces no representan a sus centros de alumnos”, refiriéndose a los voceros de la ACES (La Nación, 10 de abril de 2001:9)

¹⁰ Vocera estudiantes secundarios año 2006.. Entrevista realizada el 3 de diciembre de 2011 en Santiago de Chile. Entrevistador: Paula Zabala.

¹¹ Recordemos que el sistema electoral binominal, promulgado en 1988 a través de la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (Nº 18.700), restringe la carrera electoral independiente, pues asegura una cuota de representación a las coaliciones de partidos, incentivando con ello el bipartidismo.

Si bien muchos de los secundarios –principalmente durante las movilizaciones del 2006- tenían vinculación directa o indirecta con los partidos políticos, esto no significó que respondieran a sus mandatos desde una lógica jerárquica, pues su referente primero de autoridad siempre fue la asamblea de estudiantes. Cuestión mucho más patente en las movilizaciones del 2001, con mayor autonomía de los partidos. Para los estudiantes del 2006, la vinculación partidaria fue un traspie que posteriormente se transformó en aprendizaje.

“Yo creo que el mayor aprendizaje, que no sé si lo entendieron, pero trataron de entenderlo por lo menos los secundarios y los universitarios ahora, era el tema del rol de los partidos. O sea, que uno de la puerta para acá es del partido, pero cuando a uno lo eligen estudiantes que no tienen militancia política, uno les responde a ellos.”¹²

La figura de la asamblea general como principal órgano detentador del poder, impidió que los dirigentes recibieran de una vez y para siempre la potestad en la toma de decisiones. La figura de los *voceros*, que ya había sido ejercida durante las movilizaciones del 2001, correspondió más a la de emisario que a la de representante o líder. Por lo demás, las decisiones permanentemente eran sometidas a revisión popular y los mandatos eran en cualquier momento revocables.

El cuestionamiento a la reproducción de formas de representación existentes, formó parte de la dinámica de intercambio político entre los estudiantes:

“La FESES era muy chistosa, porque era un grupo como de 20 locos que iban, había como un par de presidentes de Centros de Alumnos y votaban entre ellos. Entonces yo les decía: ‘pero ustedes están locos, ¿cómo agarran a 20 personas, votan entre ustedes y piensan que eso representa a alguien? (...) ¡en los colegios nadie sabe que existe esto!’”¹³

Tanto a nivel discursivo como en las formas de organización, de toma de decisiones y de acción política llevada a cabo por los estudiantes, se observa una superación de los límites que el sistema representativo chileno dispone para el ejercicio democrático. La noción de representación, como pilar de la democracia, y principalmente sus efectos en la consolidación de una política de élites, se ha visto abiertamente cuestionada. Con ello, la idea de la soberanía delegada también queda puesta en entredicho.

La aparición pública de jóvenes queriendo *re-significar* lo político, en un país que históricamente ha privilegiado las acciones reformistas y la conducción de las élites en los procesos de institucionalización política¹⁴, condujo a una indudable revitalización de lo público. Si bien fueron grupos de izquierda los que iniciaron y mayoritariamente condujeron los procesos de movilización, así como alumnos de liceos públicos tradicionales o ‘emblemáticos’, en el proceso participaron jóvenes de diversos establecimientos educacionales, de otras regiones del país, de distintas clases sociales, de diferentes adscripciones políticas e ideológicas, y desde dentro y fuera de los partidos políticos. Todos ellos, enfrentados a la política institucional desde una orgánica que no carecía de conflictividad interna.

¹² Vocera estudiantil año 2006. Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2011 en Santiago de Chile. Entrevistador: Paula Zabala LLadós.

¹³ Dirigente estudiantil ACES, año 2001. Entrevista realizada el 11 de diciembre de 2011 en Santiago de Chile. Entrevistador: Paula Zabala LLadós.

¹⁴ Para un análisis historiográfico de la importancia de las instituciones en los procesos de democratización en Chile, véase Samuel Valenzuela (1985).

A través de las nuevas formas de organización presentadas por los secundarios, la deliberación y la confrontación pública adquirieron valor democrático, lo que permitió visualizar lo eminentemente político que había detrás de las movilizaciones. Esto, si consideramos con Chantal Mouffe (1999), que las posibilidades de radicalizar la democracia pasan primero por asumir que la naturaleza de lo político se encuentra en el conflicto y en la posibilidad permanente de disputar el poder y las decisiones.

En el caso de los estudiantes secundarios, podemos ver que las reglas, los procedimientos, los alcances, los límites y las posibilidades de lo político no se encontraban encriptados en discursos preconcebidos en defensa de la democracia o de lo instituido, sino que se definían a través de su disputa.

En este sentido, el proceso político desencadenado por los secundarios tenía un gran poder instituyente. Como lo ha planteado Horacio Foladori (2010:61), "...el movimiento de los secundarios se presenta como una propuesta innovadora de un nuevo orden social (...) Una organización de la sociedad que se construya sobre el principio de que el poder no debe ser delegado para siempre".

DISCUSIONES FINALES

Si bien no hemos llegado a presenciar el pleno ejercicio de la soberanía popular al alero del movimiento secundario, pues éste no ha logrado incidir significativamente en los procesos de toma de decisiones, ni menos aun conducir efectivos procesos de transformación social, sí ha habido cambios importantes en la comprensión de lo político, que pudiesen traducirse en la ampliación de las posibilidades de profundización democrática.

Por un lado, se han asentado las bases socio-políticas para la apertura de temas estructurales del país, que se encontraban obturados debido a las características de la transición a la democracia, y por otro, se han legitimado socialmente prácticas políticas que en cierto modo han desestabilizado las reglas del juego democrático representativo, o al menos, lo han puesto en jaque. Los estudiantes han abierto la posibilidad de cuestionar la trayectoria de la democratización en Chile, y nos presentan la oportunidad de revisar críticamente las estrategias que durante la transición a la democracia se visualizaron como las únicas posibles para superar el largo período de dictadura militar.

A nivel de imaginarios y discursos, el efecto de las movilizaciones se ha hecho notar. Resulta particularmente interesante constatar cómo los discursos públicos han ido cambiando en función del accionar público de los secundarios, y también cómo este accionar ha ido concitando un amplio apoyo social. Esto último es significativo en una sociedad tendiente a criminalizar las protestas (influida por los medios de comunicación), o a situarlas como parte de un pasado violento que es mejor no revivir. La tendencia por resaltar el virtuosismo de las instituciones del Estado en Chile, que ha conducido a una permanente negación de la importancia de los movimientos sociales en los procesos de democratización, ha quedado en entredicho con la aparición de las nuevas formas de protesta y organización propuestas por los jóvenes. El principio de autoridad ya no cala tan hondo en la sociedad chilena. Un ejemplo de ello es la menor aprobación que las fuerzas armadas y de orden tienen hoy en día en la opinión de los ciudadanos, respecto a lo que arrojaban las encuestas de opinión a comienzos de los 90'. Sin duda un factor que ha contribuido a ello, es el mayor flujo de información existente respecto al actuar de la fuerza pública frente a reivindicaciones sociales que han hecho eco en amplios sectores de la población.

La paulatina transformación de las demandas económicas en demandas eminentemente políticas, o la repolitización de la dimensión económica como un espacio de lucha por transformaciones sociales hacia la generación de mayores condiciones de igualdad social, se rescata como uno de los mayores

logros que el movimiento estudiantil –y particularmente el secundario durante la década estudiada- ha tenido durante la trayectoria de democratización del país.

Los jóvenes estudiantes, desde los márgenes de la política instituida, se han erigido como un actor social que potencialmente porta las posibilidades de ampliar las prácticas democráticas hacia formas de participación que superen lo meramente representativo. Por su parte, la ciudadanía como entidad regulada por ley, también es interrogada al no tener cabida dentro de estas prácticas políticas, pues al tratarse de jóvenes que en términos jurídicos carecían del derecho a participar del poder político, no es posible adjudicarles la condición de ciudadanos. No al menos desde una concepción liberal del término. Recordemos con Marta Irurozqui (2004:21) que “sin voto, no hay ciudadanía”, pero también, que la ciudadanía va más allá de un mero ejercicio individual en las urnas, pues el voto “no define exclusivamente ni la participación política ni la construcción de la ciudadanía.”

Posiblemente sea aventurado decir que se trataba de ciudadanos sin ciudadanía que se encontraban luchando por la conquista de derechos sociales, pero al menos es posible advertir que la acción política llevada a cabo por estos jóvenes traspasaba los márgenes establecidos por la democracia liberal, ceñida a los principios del gobierno representativo.

Esto nos acerca a una idea de ciudadanía como un proceso activo de constante demanda a partir de situaciones de exclusión en comunidades políticas determinadas, que se compone de -y conforma en- las múltiples luchas en el espacio público. La ciudadanía, de este modo, “...por un lado, denota una forma de participación activa en los asuntos públicos; por otro, implica una relación de pertenencia individual con una determinada comunidad política, convirtiéndose, así, en un principio constitutivo propio de cada comunidad política que determina quién constituye ésta, quien pertenece a la misma y quién no” (Irurozqui, 2008:8). Curioso resulta desde aquí pensar que en Chile los jóvenes a los 16 años de edad tienen responsabilidad penal, pero carecen de derecho a voto.

A partir de la acción colectiva de los jóvenes, que a lo largo de su desarrollo va evidenciando el desgaste de la política instituida, podemos constatar que “la democracia de las urnas” (Irurozqui, 2004) resulta insuficiente para llevar a cabo las transformaciones sociales requeridas por una sociedad que aún mantiene vigente una institucionalidad gestada en un período autoritario, y que no ha logrado generar las condiciones de bienestar social necesarios para superar su déficit democrático.

La aparición de nuevas prácticas y acciones colectivas abren el camino para pensar en otras formas de definir la ciudadanía y la democracia, de visualizar lo político más allá de lo instituido y de concebir la participación pública colectiva como un ejercicio vinculante que trascienda los márgenes de las elecciones a intervalos regulares, propia de los gobiernos representativos.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA, CAROLINA (2007), “Participación Ciudadana en el Gobierno de Bachelet: Consejos Asesores Presidenciales”, en *América Latina Hoy*, vol. 46, pp. 119-143.

ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL Y RUIZ RODRÍGUEZ, LETICIA (eds.) (2006), *Chile. Política y modernización democrática*, Bellaterra, Barcelona.

ARRAU, ALFONSO Y AVENDAÑO, OCTAVIO (2003) *La hacienda revivida: Democracia y ciudadanía en el Chile de la transición*, Santiago, Universidad de Chile, Predes, Ril editores.

CRUZ, RAFAEL (2000) “El derecho a reclamar derechos. Acción colectiva y ciudadanía democrática”, en Manuel Pérez Ledesma (comp.), *Ciudadanía y democracia*, Madrid: Pablo Iglesias, pp.263-291.

GÓMEZ TORREGO, LEONARDO (1999) “Sufijo –azo”, *Rinconete*, Centro Virtual Cervantes en http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/marzo_99/01031999_02.htm

HINKELAMMERT, FRANZ J. (1988) “Democracia y nueva derecha en América Latina”, *Nueva Sociedad* N°8, Noviembre- Diciembre, pp. 104-115.

IRUROZQUI, MARTA (2004), *La ciudadanía en debate. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral*, Documento de Trabajo N°139, Serie Historia 26, IEP, Lima.

_____ (2008) “El espejismo de la exclusión. Reflexiones conceptuales acerca de la ciudadanía y el sufragio censitario a partir del caso boliviano”, en N. Tabanera y A. Aggio (eds.), *Política y culturas políticas en América Latina*, Madrid, ARCE, Asociación de Historia Contemporánea Marcial Pons, ediciones de Historia, pp. 57-92.

MARSHALL, T.H; BOTTOMORE, T. (1998) *Ciudadanía y clase social*, Alianza, Madrid.

MORENO, MARCOS “Las reglas del juego político en Chile: Incentivos y restricciones para la gobernabilidad”, en *América Latina Hoy*, ediciones Universidad de Salamanca, vol. 46, 2007, pp. 15-40.

MOUFFE, CHANTAL (1999) *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*, Paidós, Barcelona.

PETIT, FRANÇOIS (1984), *Psicosociología de las organizaciones: introducción a sus fundamentos teóricos y metodológicos*, Herder, Barcelona.

PICHON-RIVIÈRE, ENRIQUE (1975) *El proceso grupal. Del Psicoanálisis a la Psicología social I*. Nueva Visión, Buenos Aires.

TORRES, RODRIGO (2010), Juventud, resistencia y cambio social: el movimiento de estudiantes secundarios como un “actor político” en la sociedad chilena post-Pinochet (1986-2006). Archivo halsh-00498869, versión 1, 8 de Julio.

VALENZUELA, SAMUEL (1985), *Democratización Vía Reforma: La expansión del sufragio en Chile*, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires.